

LA PROTECCION JURIDICA DEL MATRIMONIO INDISOLUBLE, DEFENSA DE LA FAMILIA

CARMELO DE DIEGO-LORA

1. Permitidme que comience con unas palabras de SS. Juan Pablo II cuando hacía referencia —no hace mucho— a que, en este tiempo, sobre todo “parece que la Iglesia es la única que tutela los derechos del hombre redimido”. A lo que añadía: “Esta verdad del hombre redimido ha de ser conservada y protegida de modo particular en lo que se refiere al matrimonio y a la familia cristiana. Vosotros sois ante todo los defensores de este matrimonio sagrado, que no permitís que se rompa el vínculo de amor indisoluble, que os afanáis por conservar el lazo de amor, que protegéis los matrimonios válidos, *que* alentáis a los cónyuges fieles para no ver a sus hijos dispersos y abandonados”¹.

En efecto, en el presente tiempo, la legislación civil de los estados modernos, que comenzó por apropiarse para ella el régimen jurídico del matrimonio, ha terminado por dejarlo desprovisto de toda connotación protectora. El divorcio sobre todo, y la indiscriminación de los hijos legítimos y los ilegítimos, han conseguido que el matrimonio, al ser secularizado, pierda socialmente prestigio, que jurídicamente se haga irrelevante acudir a su formalización legal, pues todo viene a reducirse —desgraciadamente, en esos ordenamientos— a un tema de indemnización por reparación de daños y perjuicios, caso de extinción de la relación conyugal, que tanto puede afectar a la familia legítima como a

1. JUAN PABLO II., *Discurso al VII Curso para Jueces y Oficiales de Tribunales eclesiásticos*, 13-XII-1979. La cita en lengua española procede de la Revista “Palabra”, Sección “Documentos”, DP-416 (1979).

la ilegítima, e incluso a otros sujetos con los que se tenga sólo una relación de convivencia, de mero hecho.

Es preciso volver los ojos al hombre redimido, y contemplar su dignidad, en el contexto social y político en el que vive, a través de la institución natural de la familia, cuya raíz de estabilidad se halla únicamente en el matrimonio uno e indisoluble. Y éste encuentra su amparo, en la conciencia de los hombres, en la moral católica, y a su vez, en el ámbito jurídico, en el Derecho canónico, de historia multisecular, pero siempre vivo, aunque se renueve como toda norma jurídica, conforme a la vitalidad permanente de la Iglesia a la que sirve de continuo. Y este servicio es servicio a la justicia en la Iglesia. “Tal servicio —añadía el Pontífice en la misma ocasión— es un reflejo de la caridad divina”, y ha sido confiado a los “ministros de la justicia divina”, los cuales tienen como “encargo especial la dignidad del matrimonio para conservarla incontaminada, para que la Iglesia descubra en un sacramento tan grande como un reflejo de su misma vida por la que Cristo aparece como esposo de la Iglesia”².

En esta tarea de la Iglesia, al servicio de la justicia, adquiere una especial relevancia el método de hallazgo y observancia de la justicia que es el proceso canónico.

No hace aún muchos años —el 8 de febrero de 1973— el Pontífice Pablo VI pronunció una vez más su tradicional Alocución anual dirigida a los componentes del Sagrado Tribunal de la Rota Romana³. En ella resaltaba el carácter pastoral del oficio judicial, a cuyo objeto la “*aequitas*” venía a servir el papel de medio para que este ministerio de la Iglesia, y del sacerdocio cristiano, fuera verdaderamente pastoral en el pleno sentido de la palabra. Esa *aequitas*, que —como señalaba Pablo VI— “la tradición cristiana recibió de la jurisprudencia romana”, en el Derecho canónico “constituye la cualidad de sus leyes, la norma de su aplicación, una actitud de ánimo y de espíritu que modera el rigor del derecho”. De manera que, gracias a la equidad canónica, la justicia se ejercerá queriéndola, al mismo tiempo, “más ágil, más dulce, más serena”. Agilidad, pues “la prudencia no se identifica necesariamente con la lentitud”, como la suavidad no significa que se pueda aconsejar el desprecio de las normas, “porque entonces se convertiría en perjudicial y causa de incertidumbre”.

2. JUAN PABLO II. *Ibid.*

3. AAS, LXV (1973). Estos textos en lengua española que se citan proceden de la traducción ofrecida por la Revista “Ecclesia” (1973), pp. 217-220.

como la mención de justicia serena ha de ser también rectamente entendida, pues "*nada perjudicaría tanto el orden social como una jurisprudencia que, por ser pastoral, quiera subestimar el derecho*". Es la *aequitas* —dice— el "elemento humano correctivo y factor de equilibrio en el proceso mental que debe conducir al juez a pronunciar la sentencia".

En ese contexto, en el que confluyen la ley misma, la moderación del entendimiento de la ley, y la consideración de todas las circunstancias de hecho, se enmarca el cuadro, en cuyo ámbito cognoscitivo, ha de moverse el juzgador, en su ministerio sacerdotal al servicio de la Iglesia. Como cualquier otro ministerio que arranca de la *Sacra potestas*, el ministerio judicial, Pablo VI nos enseña que "tiene sus raíces en la misión que el Señor confió al Primer Pedro, el cual, en sus sucesores, continúa gobernando, enseñando y juzgando". Un ministerio —añadía— "que forma parte integrante del mandato apostólico, y con sus pontífices todos los que, sacerdotes y laicos, han sido llamados a ejercer la justicia en nuestro nombre y en nombre de nuestros hermanos en el Episcopado". Un ministerio que otorga autoridad, pero, en definitiva, "una autoridad de servicio que consiste en el poder confiado por Cristo a su Iglesia para el bien de las almas".

Hasta aquí Pablo VI en su discurso de 1973. El mismo Pontífice, en 28 de enero de 1978, vuelve a dirigir su autorizada palabra al Sagrado Tribunal de la Rota Romana⁴, y es ocasión para que llegue a sentar una doctrina jurídica, para la aplicación del derecho por los tribunales, luminosa. Este discurso es un precioso legado que nos entregó a los juristas canónicos —y a cualquier jurista preocupado por los problemas deontológicos que surgen con motivo de la actividad judicial—, antes de morir, S.S. Pablo VI. Puede decirse que en este discurso se centra primero la atención sobre "la diligencia en el deber" del órgano judicial, y que consiste fundamentalmente en "confirmar la disponibilidad a seguir las normas del Magisterio", a la vez que "procurar la conveniente fluidez en el trámite procesal". Se presenta así la *rapidez* de la actuación procesal como "una ulterior expresión

4. AAS, LXX (1978), pp. 181-186. También en este caso los textos citados y entrecomillados en lengua española han sido tomados de la traducción publicada por la Revista "Ecclesia", XXXVIII (1978), pp. 166-168. Las referencias que en adelante hagamos con las siglas CM, pertenecen al *Motu Proprio* de Pablo VI *Causas Matrimoniales*, 28-III-1971 (AAS, LXXX, 1971, pp. 444-446).

de la llamada diligencia”, como “solicitud en el estudio y en la definición de las causas, de suerte que se eviten los dos escollos opuestos, el de la prisa y el de la lentitud”.

A partir de estas afirmaciones, se pone de relieve por Pablo VI que hay que “garantizar a los jueces la atmósfera necesaria para su examen sereno, atento, meditado, completo y exhaustivo de los problemas, para garantizar a las partes la auténtica posibilidad de ilustrar las propias razones”. Para esto “la ley canónica prevé un camino marcado con normas precisas —el proceso justamente—, que es como un carril cuyo eje es precisamente la búsqueda de la verdad objetiva y cuyo punto terminal es la recta administración de la justicia”.

Por esas razones el Pontífice se quejaba, en este discurso, de haberse instrumentalizado por algunos, con ciertas concesiones, las normas dictadas —se refiere muy especialmente al *Motu Proprio Causas matrimoniales*— con la intención de ofrecer mayor rapidez y agilidad al proceso canónico, convirtiéndolas en instrumentos tendentes “a crear una jurisprudencia no conforme con la recta doctrina, como es propuesta por el Magisterio eclesiástico e iluminada por la jurisprudencia canónica”. Pero de todos los elementos enumerados anteriormente, prosigue el Pontífice Pablo VI, “el elemento más importante... sigue siendo vuestra demostrada disponibilidad a seguir las indicaciones del Magisterio”, y agrega: “Permanece, finalmente, el deber de estudiar y de meditar en nuestro sector específico las diversas *implicaciones* directas de las enseñanzas conciliares y de llevarlas a la práctica”.

La legislación postconciliar, por la voz autorizada de su propio autor, en materia relativa a las causas matrimoniales agilizó el proceso canónico, pero no ha distorsionado el sistema matrimonial canónico, sino que sigue vigilantemente protegiendo el vínculo sagrado e irrevocable del matrimonio. Este Magisterio pontificio, por el *Motu Proprio* CM, en su exposición de motivos, hacía notar cómo a la vez que trataba de evitar, con las normas oportunas, dilaciones excesivas de los juicios matrimoniales, volvía también a mostrar *quod ad firmitatem matrimonialem vinculi attinet*.

El Pontífice Pablo VI no sólo insiste, pues, en la firmeza del vínculo, sino que invita a los jueces eclesiásticos a adentrarse en las enseñanzas conciliares sobre el matrimonio. Y desde aquellas primeras menciones de *Lumen gentium* (n. 11), poniendo de re-

lieve el carácter sacramental del matrimonio, misterio de unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, de cuya unión “arranca la familia”, y en cuyo seno “los padres deben ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe con la palabra y el ejemplo”, hasta cuando el Concilio resalta la universal llamada a la santidad en la Iglesia para todos los seguidores de Cristo, se pone especialmente el énfasis en la exigencia de que “los cónyuges y padres cristianos, siguiendo su propio camino, con amor fiel, durante toda la vida se mantengan mutuamente en la gracia, y que inculquen las doctrinas cristianas y las virtudes a la prole recibida de Dios con amor”. De manera que la construcción de “la comunidad fraterna de la caridad” y el hecho mismo de constituirse los cónyuges en “testigos y cooperadores de la fecundidad de la Madre Iglesia”, reclama que éstos procuren enseñar a todos, mostrándose como “un ejemplo de amor constante y generoso”⁵.

Nada más distante de la visión con que el Concilio Vaticano II contempla el matrimonio —“como signo y participación del amor con el que Cristo amó a su Esposa, y se entregó a Sí mismo por Ella”⁶— que llegar a estimar este vínculo sagrado, contraído por el libre consentimiento de los cónyuges, un vínculo de fácil renovación, de mediocre fortaleza ante los azarosos embates de la vida, para desaparecer en los momentos críticos, presionando constantemente en su regulación y consistencia por el espíritu del mundo. La visión del matrimonio según el Concilio Vaticano II abre, en cambio, amplios horizontes a la generosidad, a la santidad, a la que son llamados todos los fieles por el bautismo, cada uno según su condición y estado. Y responde perfectamente a lo que enseñó un preclaro maestro de la vida espiritual cuya vida y enseñanzas han dejado honda huella: “El matrimonio está hecho para que los que contraen se santifiquen en él, y santifiquen a través de él: para eso los cónyuges tienen una gracia especial, que conflere el sacramento instituido por Jesucristo. Quien es llamado al estado matrimonial encuentra en ese estado —con la gracia de Dios— todo lo necesario para ser santos, para identificarse cada día más con Jesucristo, y para llevar hacia el Señor a las personas con las que convive”⁷.

5. *Lumen gentium*, n. 42. Los textos en castellano de los documentos conciliares proceden del tomo “*Vaticano II*”, Ed. Palabra, Madrid 1968.

6. *Ibid.*

7. *Conversaciones con Mons. ESCRIVÁ DE BALAGUER*, Madrid 1970, n. 91.

Altos son los niveles que reclama al cristiano la doctrina del último Concilio ecuménico: "Cada uno de los laicos ha de ser ante el mundo un testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y un signo de Dios vivo"⁸. De aquí que haya de mostrarse "evidente para todos que los cristianos de cualquier edad o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad"⁹.

Esas metas elevadas, de santidad personal, son las que señala la Constitución *Lumen gentium*, como acabamos de ver, a los bautizados que se unen por el vínculo sagrado del matrimonio. Por estas razones, la Constitución Pastoral *Gaudium et spes*, partiendo de la idea de que "la más alta razón de la dignidad humana está en la vocación del hombre a la comunión con Dios"¹⁰, al enfocar el matrimonio, no sólo recoge el anterior magisterio de la Iglesia y ve al matrimonio naciendo de la fuente divina de la caridad, constituido a semejanza ciertamente de la unión de Cristo con su Iglesia, sino que, "así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su pueblo con una alianza de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para que los Esposos, a través de la mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como El mismo amó a la Iglesia y se entregó por ella"¹¹.

Bien se explica, en tal contexto, que la propia Constitución pastoral describa el matrimonio entre bautizados, establecido con base al "consentimiento personal e irrevocable", como "intima comunidad de vida y amor conyugal". Pero comunidad que los esposos han de construir y alimentar cada día con su generosidad, con su sacrificio, con su mutua entrega, a la que no faltará la *gracia* de Dios, puesto que "para cumplir dignamente los deberes de su estado, los esposos cristianos están fortalecidos y como consagrados mediante un sacramento especial, gracias al cual, al cumplir con sus deberes de esposos y padres, imbuidos por el espíritu de Cristo que impregna toda su vida de fe y esperanza y caridad, los cónyuges se acercan cada vez más a su plena per-

8. *Lumen gentium*, n. 38.

9. *Ibid.*, n. 40.

10. *Gaudium et spes*, n. 19.

11. *Ibid.*, n. 48.

fección personal y a su mutua santificación, y, por tanto, conjuntamente dan gloria a Dios”¹².

Toda tarea propia del espíritu humano que se siente movido por la gracia de Dios, por los dones del Espíritu Santo, para servir a la justicia en busca de la santidad, requiere que se acometa por el hombre con la intención y el adecuado esfuerzo dirigidos a liberarse de la esclavitud del pecado, venciendo la flaqueza de la carne. Y esta es siempre tarea ardua, tanto que el Apóstol San Pablo nos ha de animar a esta lucha haciéndonos ver que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que se ha de manifestar en nosotros en el tiempo futuro¹³. No puede olvidar el Concilio, por ello, al señalar esas metas tan altas de santidad para los cónyuges en el matrimonio cristiano, que esta gran empresa de justificación y glorificación de Dios, han de acometerla hombres: con sus debilidades, con sus claudicaciones y bajezas, con la tibieza que tantas veces corroe los mejores estímulos y propósitos de la vida cristiana; no ha de extrañarnos que así sea, pues también los apóstoles no dejaron de padecer de estos males, que se muestran en el Evangelio por la somnolencia y hasta en la huida cobarde, y de aquí la advertencia del Señor Jesús: *Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro vero infirma*¹⁴.

El matrimonio, pues, como toda aventura sobrenatural reservada al quehacer de los hombres, junto a la acción de la gracia, para que esa comunidad de vida y amor se alcance con plenitud carente de sombras, necesita de la lucha ascética, de la fortaleza de los cristianos. “El matrimonio —no me cansaré nunca de repetirlo— es un camino divino, grande y maravilloso y, como todo lo divino en nosotros, tiene manifestaciones concretas de correspondencia a la gracia, de generosidad, de entrega, de servicio. El egoísmo, en cualquiera de sus formas, se opone a ese amor de Dios que debe imperar en nuestra vida. Este es un punto fundamental, que hay que tener muy presente, a propósito del matrimonio...”¹⁵. El matrimonio, sin embargo, como sucede con el mismo bautismo, que no abandona al bautizado aunque no luche éste por la santidad, existirá de todos modos, al haber nacido del consen-

12. *Ibid.*

13. Vid. Rom. 6,12-21; 7,13-25; 8,8-25.

14. Mc 14,38-39.

15. *Conversaciones...*, o. c., n. 93.

timiento personal e irrevocable; y a pesar de que Cristo salga al paso de los cónyuges, éstos pueden resistirse, sin embargo, a seguirle. Por esta poderosísima razón, la Constitución conciliar considera en este punto que “para desempeñar constantemente las obligaciones de esta vocación cristiana se requiere una gran virtud. Por eso, los esposos, ya fortalecidos por la gracia para llevar una vida santa, habrán de pedir en su oración y cultivar con asiduidad la firmeza en el amor, la grandeza de alma y el espíritu de sacrificio”¹⁶.

2. Si acudimos pues, al Concilio Vaticano II, vemos nacer ese vínculo sagrado de un acto humano —personal e irrevocable—, “mediante el cual los esposos se entregan y se aceptan mutuamente”, surgiendo, de este modo, “una institución permanente, que también existe ante la sociedad”. De manera que, en adelante, “este vínculo sagrado, en atención al bien de los esposos, de los hijos y de la sociedad, no depende de la voluntad humana”. Y hasta tal punto no depende de la voluntad humana, que por entenderse que ese acto humano lleva consigo una donación mutua de dos personas, por el hecho mismo de que esta donación es irrevocable, y también “por el bien de los hijos, esta íntima unión exige la plena fidelidad de los esposos e impone su indisolubilidad”. Precisamente “para cumplir dignamente los deberes de su estado, los esposos cristianos están fortalecidos y como consagrados mediante un sacramento especial”¹⁷.

Esa firmeza del matrimonio canónico, que se expresa en el *Codex*, mediante las notas esenciales de su unidad y su indisolubilidad (can. 1013 § 2), y en ese conocimiento indudable, a la vez que elemental, que deben tener los contrayentes, de tratarse de una sociedad permanente entre varón y mujer para engendrar hijos (can. 1082 § 1), se proyecta a su vez en una serie de garantías jurídicas, protectoras de la estabilidad, del fortalecimiento de la institución matrimonial. Son cautelas jurídicas que el ordenamiento canónico adopta con la precisa finalidad de que el vínculo sagrado, que es por naturaleza perpetuo y exclusivo, y que surgió del contrato matrimonial válido (can. 1110), no quede sometido al evento posterior del fraude de ley, del cambio de voluntad de los que lo contrajeron; no quede expuesto al riesgo de los deseos del egoísmo humano, decidido a destruir un acto

16. *Gaudium et spes*, n. 49.

17. *Gaudium et spes*, n. 48.

humano que fue en su momento realizado a través de unas decisiones de voluntad de naturaleza irrevocable.

Tales garantías o cautelas jurídicas son de naturaleza formal, y constituyen, para los propios cónyuges y para la sociedad eclesíástica, el entorno de seguridad jurídica que apoya, a lo largo del tiempo y a pesar del cambio de circunstancias, la permanencia y certidumbre de un vínculo jurídico sagrado que, una vez contraído, no pueden los cónyuges ya disponer de él.

Esas garantías, que constituyen el entorno de protección jurídica formal con que el matrimonio es tutelado por el ordenamiento canónico, son fundamentalmente las siguientes: a) la forma garantizante de su celebración; b) el que se le proporcione un armamento defensivo de la validez del vínculo contraído, mediante un sistema específico de presunciones, que lo hace fuerte frente a eventuales impugnaciones; y c) que el proceso por el que se pretende esa impugnación, mediante el ejercicio de la acción de nulidad, quede sometido a un tratamiento jurídico especial con el que se aspira a que la supuesta connivencia de los sujetos, que están en la relación matrimonial, no influya en el resultado procesal, y estos sujetos no puedan servirse del proceso mismo como instrumento *no al servicio de la verdad objetiva y de la justicia, sino del fraude de la ley*, para lo cual se adoptan *las medidas procesales adecuadas que eviten su manipulación interesada al servicio del egoísmo humano y en perjuicio del sagrado e irrevocable vínculo contraído*.

A esas garantías procesales se ha de añadir la atención pormenorizada con que el legislador canónico ha regulado todo el tema del matrimonio, sus requisitos, las prohibiciones de contraer, las dispensas, las causas de la nulidad, y el propio proceso de nulidad del matrimonio. A esa legislación, tan detallada y diligente, se ha de sumar la atención cuidadosa, el celo con que la Iglesia a lo largo de los siglos ha venido defendiendo la indisolubilidad del vínculo.

Ante ese entorno, que se desprende de lo que acaba de enunciarse, toda invocación que se haga a un supuesto espíritu del Derecho canónico resulta por completo vana. La rotunda configuración del entorno de protección jurídica, con que el vínculo sagrado del matrimonio es defendido por la legislación canónica, es la única comprobación —la evidente prueba— por la que se acredita cuál sea verdaderamente ese espíritu: no el que postula la inconsistencia y la incertidumbre del vínculo, sino el que lo

asegura en medio de los posibles ataques, que han de producirse en vía procesal, nunca, por otra parte, impedidos, y merecedores, en cambio, de alcanzar éxito si en realidad acreditan su razón frente a un vínculo que, en rigor, no resultara ser más que mera apariencia. El ordenamiento canónico nunca ha impedido, con base a la nulidad, impugnar un matrimonio sólo aparente, pero a la vez ha proporcionado unos medios jurídicos defensivos del vínculo conyugal contraído, aparentemente válido, para que tanto el vínculo sagrado como la ley natural no queden sometidos al arbitrio interesado de la insidia humana.

a) Para Lalaguna, la forma del acto jurídico, entendido en sentido técnico, “es, ante todo, instrumento receptivo del consentimiento”¹⁸. Esta es, pues, la primera función que viene a realizar la forma canónica.

“En segundo lugar —agrega—, la forma significa que el consentimiento exteriorizado —en ella recibido— corresponde al querer de las partes. Esta será la regla general. Puede darse, y de hecho se da con frecuencia, una discordancia entre voluntad real y consentimiento aparente. Pero la discordancia es excepcional, y por ello, para ser tenida en cuenta, ha de probarse. Mientras falte esa prueba, el consentimiento formal se presume real. Esta es verdaderamente una función de certeza”¹⁹.

No sólo, pues, sirve al consentimiento como recipiente de su emisión, sino que constata —al conservar la forma lo emitido— que tal consentimiento se emitió —*publicidad formal*—, y que fue declarado con tales garantías de libertad que, en principio, se muestra como verdadero —*publicidad material de sinceridad*—, conforme con el querer interno de sus emisiones. Tales funciones se alcanzaron desde el momento en que el Decreto *Tametsi* del Concilio de Trento sujetó a forma reglada el acto de celebrar el matrimonio. Decreto principalmente motivado en razón al “clima de inseguridad en torno a los matrimonios clandestinos” y cuyo pronunciamiento se aceleró “por el aguijón de la Reforma protestante”²⁰.

Mas fue, en realidad, la necesidad de certidumbre la que condujo a la exigencia de forma canónica, como elemento condicionante del acto jurídico matrimonial. No podía aceptarse pacien-

18. E. LALAGUNA, *Función de la forma jurídica en el matrimonio canónico*, en “*Ius Canonicum*”, I (1961), p. 216.

19. *Ibid.*, p. 219.

20. *Ibid.*, p. 220.

temente el clima de inseguridad que rodeaba la prueba de la celebración del matrimonio canónico. Como ha hecho notar Navarro Valls, "las consecuencias del régimen pretridentino eran inquietantes por sí mismas, sin necesidad de aneja "orquestación publicitaria" protestante: multiplicadas las posibilidades de uniones clandestinas y de estados matrimoniales ilegítimos, agudizados los conflictos de conciencia, y centrado el consentimiento matrimonial sobre situaciones irreflexivas y pasionales, no se requiere demasiada imaginación para suponer que, por uno u otro motivo, o con una u otra causa, no tardaría en provocarse en el seno de la Iglesia un movimiento de reforma que obedeciera a razones reales y no meramente políticas"²¹.

Se ha hecho notar que el matrimonio canónico, desde su origen, tiene unas características bien diversas al matrimonio romano, en el que pudo inspirarse. Acuña²² ha mostrado esas diferencias y cómo, en sede canónica, del contrato matrimonial nace una situación jurídica indestructible, lo que hizo que quedara potenciado el valor de la declaración consensual. Pero ya, desde esos primeros siglos, aunque tenga siempre precedencia el consentimiento, *aparece frecuentemente la bendición nupcial como un primer elemento formal, a la vez que servía de prueba pública* del sentido que para el cristiano poseía el matrimonio, tendiéndose de este modo también a que las nupcias se realizasen sin formas externas paganas. Esa bendición nupcial cumplió siempre el *"doble cometido de significar el carácter sagrado de la institución matrimonial y de prestar a ésta una necesaria publicidad"*²³. Por estas razones "no sin motivo se ha observado que la Iglesia ha procurado a lo largo de su historia que el matrimonio de los fieles estuviera calificado por una celebración religiosa, y es que la valoración sacramental del matrimonio —en la conciencia del pueblo— va unida a la observancia de la forma canónica, que, por encima de imposiciones jurídicas, los propios siglos han ayudado a consolidar. La supresión radical de la misma, muy previsiblemente, llevaría aparejada una secularización del matrimonio que necesariamente conduciría a su descristiani-

21. R. NAVARRO VALLS, *Forma jurídica y matrimonio canónico*, en "Ius Canonicum", XIV (1974), p. 90.

22. S. ACUÑA, *La forma del matrimonio hasta el Decreto "Ne Temere"*, en "Ius Canonicum", XIII (1973), especialmente en pp. 138-165.

23. *Ibid.*, p. 161.

zación, con la consiguiente obnubilación del carácter sacramental y sobrenatural que la unión entre cristianos reviste”²⁴.

“El Decreto *Tametsi*, pues, representa un paso fundamental en la historia de la disciplina matrimonial canónica; su culminación, o su mejora, en el decreto *Ne temere*, cierra la época de consolidación de la forma matrimonial y abre la etapa de la forma consolidada, *que desde Pío X a nuestros días ha venido corriendo*”²⁵.

La forma, pues, ha venido a proporcionar al matrimonio seguridad, certeza, constatación pública de su celebración. Jamás se ha intentado, con la exigencia de forma, suplir el consentimiento, que es de donde nace —can. 1081— el matrimonio, ni vaciar el acto de contraer de su contenido.

En efecto, la forma canónica no agota la verdad acerca del consentimiento, como tampoco se ha de temer que eclipse el sacramento de la mirada del creyente, sino que, a uno y otro sirve, como instrumento apto. Mas no sólo esto, que ya sería bastante para justificarla, sino que, al mismo tiempo, tanto a la sociedad eclesiástica como a los propios cónyuges ofrece un sistema seguro de comprobación a la luz que proporciona, al vínculo sagrado, el preciso ámbito de protección formal²⁶ en el que se sien-

24. R. NAVARRO VALLS, l. c., pp. 96-97.

25. S. ACUÑA, l. c., p. 181.

26. De involución puede calificarse el intento de G. ALBERIGO y otros —*La riforma del matrimonio dopo il Concilio*, en “Ephemerides Iuris Canonici”, XXX (1974), pp. 258ss— al postular el abandono a los libros litúrgicos de la normativa relativa a la celebración del matrimonio. En rigor, no sólo a estos libros, pues la doctrina contenida en el citado trabajo es lo suficientemente confusa como para contenerse en la remisión a una sola fuente de indole litúrgica: también menciona que la forma del matrimonio puede quedar además remitida en su normación a las legítimas costumbres y normas establecidas por las Iglesias locales, e incluso algunas disposiciones generalistas, aparte de un inconcreto papel de presencia de la comunidad, no suficientemente delimitado. No dejan, por otra parte, en un afán de acumular cuestiones, incluso de sugerir la posibilidad de una celebración del matrimonio por grados, carente de precisión alguna. Pero quizá, lo que más evidente queda es que esa supuesta forma de celebración, ante la comunidad eclesial, sería sólo un requisito *ad liceitatem* del matrimonio. Afortunadamente, el régimen jurídico vigente sobre la forma del matrimonio es más claro, sencillo y ofrece mayor y mejor seguridad que el que proponen estos autores. Como también goza de análogas cualidades el que se divisa *de iure condendo*. Sobre el opúsculo citado, hizo Giacchi una crítica que afecta al conjunto de los aspectos del matrimonio tocados por Alberigo y colaboradores, y que constituye una adecuada réplica a los equívocos que éstos expresaron. Vid. O. GIACCHI, *Diritto e spiritualità nello Schema di riforma del matrimonio canonico*, en “Ephemerides Iuris Canonici”, XXXI (1975), pp. 7-37. También, en la misma revista y año, pp. 38-46, cfr. el trabajo, asimismo crítico con relación a

te en principio respetado, amparado de todo ataque que no se presente debidamente fundamentado con apariencias de pretensión que merezca en justicia ser considerada.

La forma resulta ser, por consiguiente, *el primer mecanismo jurídico de protección del matrimonio*, y a la vez el más importante, pues donde quiera que haya forma canónica habrá de pensarse que hay matrimonio, y éste —como ocurre, análogamente, en cualquier sistema jurídico, con los contratos de naturaleza formal— será válido en principio.

b) Todo el esfuerzo del trabajo de Calamari tendía a justificar el principio *favor matrimonii* desde el punto de vista del interés público. De modo que, para él, aunque el matrimonio se considera un contrato, resulta indiscutible que *la libertà dei contraenti cessa appena concluso il contratto, e subentra a regolarlo e a disciplinarlo, la volontà della collettività (Chiesa, Stato)*²⁷. Y de aquí que este principio venga a significar *la tutela del interés público en mantener el matrimonio con preferencia, y prevalentemente, a todo otro interés —sea público o privado—* que se ponga en juego durante el desarrollo del proceso; también significa, por otra parte, al sentir de Calamari²⁸, la defensa del vínculo matrimonial contra la actividad de las partes, actividad que es dolosa frecuentemente, y que si en alguna de las partes carece de esta característica, puede, sin embargo, permanecer inerte en el proceso dejando de defenderse.

Las presunciones *iuris*, ha hecho notar Labandeira, se apoyan también “en la experiencia y en la probabilidad de un razonamiento lógico, es decir, en la fuerza probatoria del indicio ... Pero la mera probabilidad no es suficiente para justificar su elevación a la categoría de norma universal”: Se trata, pues, siempre —añade— de “razones supremas, metajurídicas, que mueven al legislador a crear la presunción. No se forman por mero capricho: además de proteger tan grandes bienes, la presunción supone otras ventajas, pues hace más fácil la aplicación del Derecho y representa un estímulo para la marcha del proceso”²⁹.

aquellos autores, de CH. LEFEBVRE, *Brèves remarques au sujet des conclusions, d'un débat sur le schema 'De matrimonio'*.

27. Vid. M. CALAMARI, *Il “favor matrimonii” nel processo matrimoniale canonico e civile*, Padova 1932, p. 15.

28. *Ibid.*, p. 46.

29. E. LABANDEIRA, *Las presunciones en Derecho Canónico*, Pamplona 1967, pp. 125-126.

En un claro contexto formal surge la sanción presuntiva de la Iglesia, que adopta siempre, en principio, una postura favorable al matrimonio contraído en forma canónica. De manera que de ésta, fielmente observada, se deriva la presunción plena de la validez del matrimonio en todos aquellos extremos que sostienen esa validez, de tal modo que si, por parte de alguien legítimamente situado en condiciones de impugnar por nulo ese matrimonio, se pretende tal impugnación, tendrá necesariamente que demostrar en juicio que el elemento concreto, viciado o inexistente, causante de la nulidad, se produjo a pesar de la forma canónica.

En efecto *solus consensus matrimonium facit*. Pero “el consentimiento inicial es un *acto* comprometedor del futuro ... Hay, por tanto, que tener en cuenta que la perseverancia del consentimiento es compatible con la pérdida de la atracción hacia el otro cónyuge, con el arrepentimiento de haberse casado, con plantearse la ruptura del matrimonio e incluso con desearla con vehemencia. El estado de la voluntad persiste entre las vicisitudes afectivas por las que puede pasar la vida matrimonial”³⁰. Contra los peligros posibles que esas vicisitudes pueden presentar, se dirigen las presunciones legales, cuya justificación en un sistema matrimonial carente de formalización se muestra como una evidente necesidad, porque “el matrimonio no es nunca una situación de hecho”³¹.

Estima Miguélez que el *favor iuris* es una protección, sobre todo, de la institución matrimonial y se expresa en el sentido de “tendencia o propensión general del Derecho a proteger de un modo especial y preferente la institución matrimonial con el fin de asegurar su vida normal”³².

30. P. LOMBARDÍA, *Supuestos especiales de relación entre consentimiento y forma*, en AA.VV., *Derecho Canónico*, II, Pamplona 1974, p. 130.

31. J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, III, Pamplona 1973, p. 299.

32. L. MIGUÉLEZ, *El favor iuris en el matrimonio*, en “Revista Española de Derecho Canónico”, III (1948), p. 355. En efecto, para Miguélez, “todos los derechos legítimos, tanto los privados como los públicos, deben gozar y gozan ordinariamente de la protección de la Ley ... Por consiguiente, si el “favor iuris” del canon 1014 no significara otra cosa que esto, sería innecesario que se hubiera expresamente consignado en dicho canon. Pero significa algo más”. Y tras citar a Coronata, Wernz-Vidal, Capelo y Blat, piensa que los autores “consideran el ‘favor iuris’ no como una protección general del Derecho, sino como una protección o ayuda especial, mayor que la que presta a otras instituciones o derechos individuales, encaminada a sostener el vínculo” (*Ibid.*, p. 354).

Mas también el matrimonio goza de *otras presunciones*, que rodean al can. 1014, como una constelación que termina de establecer la postura defensiva del matrimonio con que el legislador pretende protegerlo. Se trata de las presunciones que intentan amparar aquel elemento invisible, sutil dijimos antes, por el que nace el matrimonio y sin el cual no surge, aunque se haya observado la exigencia de forma canónica. Nos referimos *al consentimiento, especialmente contemplado por el legislador canónico con esa intención tuitiva*.

Por su importancia, comenzamos por la *presunción del can. 1086 § 1*, la que llamamos *presunción de sinceridad*, o de coherencia entre voluntad interna y voluntad declarada.

En segundo lugar, otra *presunción* que protege al consentimiento emitido es la *del can. 1093*, la que pudiéramos llamar, según la terminología de Hervada-Lombardía, *la presunción del consentimiento perseverante*.

Como sabemos, en esta presunción encuentra su apoyo la subsanación en la raíz de los matrimonios nulos. Mientras esa voluntad no haya sido revocada, se presume *iuris tantum* que permanece. Pero una vez más se pone de relieve el espíritu del Derecho canónico: defender el matrimonio, que nace del consentimiento libremente emitido. En principio, la defensa prioritaria se la otorga la forma. Pero también, si hubo en su origen consentimiento, el legislador intenta salvar aquel intento de matrimonio, incurso en nulidad, pero del que se emitió el consentimiento, acudiendo a una solución *a posteriori*, para lo que se sirve artificiosa, formalmente, de una presunción de perseverancia de esa voluntad, lo cual no impide desde luego que se pueda probar lo contrario, es decir, que hubo revocación del acto de voluntad.

También auténticas *presunciones* son las *del can. 1082*, en relación a la capacidad no ya para otorgar el consentimiento que genera el matrimonio, sino para conocer el objeto fundamental sobre el que ese consentimiento recae, al menos en lo que esencialmente debe ser conocido; y *del can. 1015*, que más que al matrimonio mismo afecta a su consumación. *Ambas son presunciones a favor de la firmeza del matrimonio*, pues la consumación bien sabemos cómo también puede influir en el mantenimiento y firmeza (cann. 1118 y 1119) de la relación³³. Ambas

33. Vid. por su gran interés el estudio histórico, en relación con el significado de la consumación del matrimonio, expuesto por J. HERVADA - P. LOMBAR-
DÍA, *El Derecho...*, I. c., pp. 275-313.

presunciones son también *iuris tantum*, aunque protejan aspectos bien diversos, si bien no dejen de coincidir con las anteriores en ese fenómeno tuitivo general designado por *favor matrimonii*.

c) *Sólo mediante el cauce necesario que el proceso contradictorio ofrece, puede llegarse a la declaración de nulidad del matrimonio contraído.* Este proceso presenta dos variantes posibles de naturaleza procedimental: uno es el comunmente llamado proceso ordinario de nulidad con trámites análogos, salvo algunas modificaciones peculiares, al que designamos, en Derecho procesal canónico, con los términos de "proceso ordinario"; la otra variante es la que se ha establecido en previsión de casos especiales, cual es el designado como proceso "*in casibus specialibus*". No existe, en el ordenamiento canónico, otro cauce legal apto para declarar la nulidad de un matrimonio. Con ello ha desaparecido toda posibilidad de acudir a la vía administrativa al objeto de declarar estas nulidades; como igualmente de raíz ha sido eliminado el riesgo de que, por razones pastorales, exigentes de decisiones movidas por la urgencia, puedan darse otros pronunciamientos jurisdiccionales, al margen de la norma procesal, relativos a la nulidad de un matrimonio entre bautizados, contraídos en forma canónica, y, por tanto, aparentemente válido.

La voluntad patente del legislador canónico se halla suficientemente expresada en el can. 1960, en el art. 1 de la Instrucción PME y en la norma I del *Motu Proprio Causas matrimoniales* de Pablo VI. Expresamente se excluye la transacción entre las partes, el juicio de árbitros, el juramento decisorio: las causas matrimoniales de nulidad, cualquiera que fuese el procedimiento a seguir para su trámite, sólo cabe sean decididas por sentencia, sea ésta del Tribunal competente, sea del correspondiente Ordinario del lugar (actuando personalmente en su oficio de juez) en la hipótesis de casos especiales. Pero, además, el pfo. segundo del pgfo. 3 del art. 1 de la Instrucción *Provida Mater Ecclesia* (15-VIII-1936) califica de incompetencia absoluta la de cualquier otro juez (vid. can. 1558 en relación con el can. 1892, 1.º), salva siempre a su vez la jurisdicción suprema del Romano Pontífice y las cuestiones acerca de la validez que puedan ser llevadas a la Sagrada Congregación de Sacramentos (vid. art. 2 de la Instrucción citada en relación con los cann. 1597, 1557 § 1 n.º 1.º y § 3, y 249 § 3).

El legislador canónico prefirió elegir, con exclusión de cualquier otro sistema, la vía procesal al objeto de conocer y juzgar acerca de las peticiones de nulidad de matrimonio. Esto permite pensar que siendo el proceso, fundamentalmente, la ordenación de un sistema de garantías para la decisión justa, el legislador deseó que los pronunciamientos en materia de nulidad se dieran en un ámbito formal jurídico que ofreciera las mayores seguridades, tanto para los interesados en la decisión como para su justicia. Ese reconocimiento vino a tener una explícita y autorizada plasmación en la Alocución del Papa Pío XII al Tribunal de la Sagrada Rota Romana, de 2-X-1944³⁴. En esta Alocución, apuntando el Pontífice al oficio del Defensor del vínculo, se pronunció abiertamente por el principio *pro rei veritate*.

No ha querido, pues, el legislador canónico —ni desde el punto de vista de la cuestión de fondo como tampoco desde la perspectiva de la forma jurídica a utilizar para la decisión a pronunciar— dejar al arbitrio del Ordinario propio que, en su actividad pastoral, se encuentre con hipotéticas situaciones de posibles nulidades matrimoniales, pueda decidir los conflictos que se planteen en relación con este sacramento. El legislador canónico, en rigor, ha reservado este tema a su propia normación, y ha detallado las causas y circunstancias por las que incurre el matrimonio en nulidad; y, al mismo tiempo, ha sometido la impugnación de la validez del matrimonio, formalmente aparente, a las reglas jurídicas que proporcionan la mayor garantía humana concebible de justicia. Sólo en este contexto, del más acorde sometimiento a la Ley, y el más independiente juicio, resultado del conocimiento más acabado de los hechos que la prueba judicial ofrece al juez, éste puede, conforme a Derecho y según su conciencia, emitir su juicio de certeza acerca de la nulidad que se pretende (can. 1869). Sólo, en ese contexto de garantías formales, cabe constatar con certeza —certeza moral— el hecho de la nulidad que fue acusada y, a continuación, declararla solemnemente en la sentencia.

El pronunciamiento judicial queda sometido, de un lado, al planteamiento procesal que las peticiones de partes formularon (vid. art. 57, n.º 3.º, de la Instrucción PME), con las garantías que aporta el contradictorio procesal; de otro, al juicio de la conciencia en relación a la verdad de los hechos que ante el juez han sido probados (art. 197, §§ 2 y 3, de la Instrucción

34. AAS, XXXVI (1944), pp. 283-284.

PME); y, por último, al sometimiento también del dictado de la Ley, que es la que instruye al Juez o Tribunal sobre la causa de la nulidad (art. 200, § 3, de la Instrucción PME), puesto que únicamente el legislador es la fuente legítima determinante de las diversas causas de nulidad (vid. cann. 1079, 1041, 1083-1092, 1094-1096, 1098, 1099 y 1104). Nos encontramos, ante una materia jurídica, sometida al principio más absoluto del primado de la Ley. Si este primado no rigiera, imponiendo su observancia más rigurosa al órgano judicial, el legislador hubiera remitido el tema de la nulidad a cualquier procedimiento menos formalista e incluso carente de la nota jurisdiccional, como pudiera haber sido un hipotético juicio de árbitros; y aunque lo hubiera situado en un ámbito puro jurisdiccional, no hubiera, sin embargo, reservado este tema celosamente para los órganos encargados de la función judicial, con exclusión de la vía administrativa, en la que cabe una mayor iniciativa, una más amplia discrecionalidad.

Esa labor judicial, que implica obediencia observante de la Ley, respeto y entendimiento de los hechos para subsumirlos en la hipótesis legal prevista, o para entenderlos incompatibles con ella; ese obrar del juez, sometido tanto a las peticiones de partes, como al resultado probatorio, como a las exigencias de la Ley, es, sin embargo, perfectamente compatible con una actividad inteligente y con la formación prudencial del acertado juicio³⁵.

Por último, esa rectitud en la formación y emisión del juicio sobre la nulidad, se facilita también mediante una garantía última, que hace auténtico el principio de contradicción dentro del proceso de nulidad, constituido por la presencia en el lado de parte demandada, y enfrentado por ende con la parte que acciona, del *Defensor del vínculo*: éste es pieza clave en el proceso de nulidad, y, sin cuya obligada citación, quedarán las actuaciones judiciales, derivadas de la demanda, viciadas por la sanción expresa de nulidad (can. 1587), lo que conduce al deber del tribunal, si no pide la citación la parte actora, de tenerla que ordenar *ex officio* (art. 74 § 1 de PME).

35. Vid. la Alocución del Papa Pablo VI, al S. Tribunal de la Rota Romana, de 27-I-1969 —AAS, LXI (1969), pp. 174-181—, en la que se hace notar cómo el órgano judicial actúa: “sirviéndose de un procedimiento humano propio, que hace de la persona de él investida, un ejecutor responsable, una causa segunda como dicen los teólogos”.

Si es de interés sumo para el legislador eclesiástico ofrecer al proceso de nulidad de matrimonio un sistema de garantías que evite el fraude procesal y con el que pueda el juez conservar su independencia y emitir rectamente su juicio, de mayor interés aún ha de ser, para el ordenamiento canónico, que, desde el primer momento en que surgió a la vida jurídica ese vínculo estable y sagrado, quede constancia pública cierta de su nacimiento. Con esta certeza inicial, habremos recorrido la mayor parte del seguro camino que termina en la afirmación de que el principio *favor matrimonii* ha quedado custodiado especialmente por la Iglesia, sirviéndose del Derecho.

3. El matrimonio procede del consentimiento libremente expresado por los contrayentes. Sin embargo, no han faltado autores, en este tiempo, que intentan, con base a un supuesto espíritu del Derecho canónico, dejar envuelta en una zona de incertidumbre permanente, de inseguridad jurídica, la fortaleza de este vínculo sagrado. Se sirven, para debilitar la firmeza de lo que —por voluntad positiva de Dios y por Ley natural— es de naturaleza estable, del estado de libertad de que parten los cónyuges antes de contraer, de la sutil naturaleza del consentimiento interno que hubo de ser manifestado, de lo voluble que es la condición humana.

Ante tal tipo de planteamiento, la respuesta de cuál sea el espíritu del Derecho canónico la tiene que ofrecer el mismo Derecho canónico, que en principio nos es permitido conocer por la propia legislación positiva. Y sólo del conjunto de lo que se prescribe en los cánones, nos será posible entender el espíritu jurídico que informa la institución matrimonial. Intentar conocer el espíritu del Derecho canónico en otras latitudes, ajenas al propio Derecho canónico, es como intentar conocer los rasgos característicos y costumbres de un pueblo determinado no por la observación de los habitantes de ese pueblo, sino indagando en rasgos y características de pueblos vecinos y colindantes. La indagación nos dará a conocer cómo son esos pueblos vecinos y colindantes, pero nunca nos instruirán de cómo es el pueblo que deseamos conocer.

Por el contrario, la potestad judicial, enraizada en la misión, como dijo el Pontífice Pablo VI, del “primer Pedro”, y confiada por el Papa y los Obispos a los que ejercen el ministerio de jueces en la Iglesia, ha de servir, a la hora de emitir su juicio, a la verdad. Tal verdad es la que ofrece el Magisterio pontificio y

el conciliar sobre el matrimonio, una verdad que el ordenamiento canónico, en su espíritu y en sus manifestaciones positivas, nos proporciona, al proteger con sus leyes decididamente el vínculo sagrado contra todo fraude, contra toda connivencia egoísta, contra el cambio de voluntad de los cónyuges, contra todo efecto que la presión social pueda ejercer en el intento paganizante de convertir un vínculo sagrado irrevocable en una situación fáctica, con efectos jurídicos sí, pero sometida al capricho y al arbitrio de esa intención revocatoria del hombre que lamente más tarde, por razón de los intereses que fueren, haber contraído un compromiso de carácter estable.

Con arreglo a la enseñanza del Pontífice Pablo VI, el que ejerce el oficio judicial ha de someterse fielmente a la observancia de la ley escrita, querida por el legislador y por él promulgada. Y no sólo a las leyes que regulan y determinan las causas de la nulidad matrimonial, sino también a lo que parece adjetivo y secundario, como son las leyes que ordenan y establecen el modo de proceder, la actividad misma del procedimiento en las causas matrimoniales. En efecto, así nos lo dijo en aquella Alocución ya citada del 28 de enero de 1978: “incluso las leyes que regulan el acontecer procesal tienen, en el ordenamiento eclesial, una intrínseca razón de ser, son fruto de probada experiencia, y, por tanto, deben ser observadas y respetadas. Garantía de ponderada búsqueda para el juez y de ilustración de los problemas..., el procedimiento canónico debe ser, por tanto, aceptado con obligada obediencia y seguido con gran atención, sin ceder a una facilonería, acabando por favorecer la permisividad, con detrimento de la ley de Dios y con perjuicio del bien de las almas”.

La actividad judicial, ateniéndose a esos supuestos indicados, procurará rodearse de serenidad, operar ágil y lo más rápidamente posible, dulcemente en el trato con los cónyuges litigantes y con todos los que, de algún modo, acuden al tribunal, pero éste formará su certeza moral con base al estudio detenido de las pruebas, partiendo siempre del sometimiento más delicado a la ley y a la *mens legislatoris*, manifestada magistralmente. Ejercitará su función “sirviéndose de un procedimiento humano propio, que hace, de la persona de él investido, un ejecutor responsable, una causa segunda como dicen los teólo-

gos”³⁶. Y el juicio se emitirá según un “equilibrado estudio de las pruebas e indicios por el juez, cuya conciencia queda particularmente comprometida al realizar esta tarea”³⁷. Ahí, en el interior de esa conciencia, ha de fraguar el juicio fruto de la prudencia jurídica: esa sabiduría que ha de ser exigida al juez para que sepa distinguir la nulidad del matrimonio, para declararla en su sentencia, de otro cualquier matrimonio que, conforme al querer de la Iglesia, sea válido por mucho que tal validez le sea impugnada por demanda judicial.

Es doctrina comúnmente recibida que el *bonum fidei* corresponde a la propiedad esencial del matrimonio que el Código llama *unitas*. Mas también, a nuestro parecer, vivir la virtud de la fidelidad no deja de favorecer la firmeza del vínculo, o a otra propiedad esencial, la *indissolubilitas* (can. 1013 § 2). “La obligación de fidelidad es en sí *duradera*. Tiende precisamente a conceder a la voluntad constancia y firmeza contra las violaciones y además a dar a los demás una garantía de seguridad y confianza”³⁸. Este resultado, a nuestro parecer, se ha de alcanzar siempre superando las pruebas del tiempo y de los deseos cambiantes de los hombres.

El matrimonio, como ya vimos, según *Gaudium et spes*, de plena conformidad con la tradición católica, ha sido establecido sobre la base del “consentimiento personal e irrevocable”, de un pacto conyugal en que marido y mujer *iam non sunt duo, sed una caro*³⁹. Por ello “esta íntima unión exige la plena fidelidad de los esposos e impone su indisoluble unidad”⁴⁰.

La labor del órgano judicial consiste fundamentalmente en resolver en justicia, partiendo, para su decisión, del conocimiento de la verdad de los hechos y de las consecuencias que estos hechos tienen ante la Ley canónica: en su juicio habrá de saber distinguir las exigencias legales, la naturaleza de los preceptos y el servicio que la equidad bien utilizada puede prestar, en el caso concreto, al rigor del precepto. Pero nunca una pretendida indulgencia, o piedad para con las personas, podrá in-

36. PABLO VI, *Discurso al Tribunal de la Rota Romana*, 27-I-1969 (AAS, LXI, 1967, pp. 174-180).

37. PABLO VI, *Discurso al Tribunal de la Rota Romana*, 28-I-1971 (AAS, LXIII, 1971, pp. 135-142).

38. J. MAUSBACH - G. ERMECKE, *Teología moral católica*, III, trad. de M. GARCÍA APARISI, Pamplona 1974, p. 624.

39. Mt 19,6.

40. *Gaudium et spes*, n. 48.

fluir en que se convierta lo que, por Derecho divino, es válido, en nulo; nunca podrán servir —esos sentimientos— para que se proporcionen socorros o ayudas que faciliten sean satisfechos los volubles caprichos de la voluntad humana, o sirvan incluso para atender reales necesidades psicológicas, o de otra especie que intenten adquirir reconocimiento jurídico, contrariando la voluntad de Dios para con esas personas.

Lo que merece corrección para el hombre, o lo que en todo caso pudiera ser motivo de compasión, no se hace título legítimo que pervierta el ordenamiento jurídico canónico tal como la Iglesia, por su legítima autoridad, ha establecido. De análogo modo nunca será función del moralista buscar subterfugios que le sirvan instrumentos mentales para satisfacer a su razón y así evitar el encuentro con la verdad y las consecuencias que se le derivan, amortiguando el propio sentido de responsabilidad.

La actitud pastoral de la Iglesia ha de ser dirigida, en todo momento, a fortalecer esa voluntad constante y firme que habilita para que los cónyuges —superando las pruebas del tiempo y del cambio de las circunstancias— puedan vivir fieles al compromiso contraído irrevocablemente. Así lo pone de relieve la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, *Gaudium et spes*, en sus números 47 a 52, relativos al matrimonio y a la familia. Así lo sigue poniendo de relieve la presente doctrina pontificia. Defender, en el plano jurídico, el matrimonio indisoluble, defender de la estabilidad y cohesión de la familia, de la sociedad civil y el núcleo social vivo más íntimo de la actividad santificadora y apostólica de la Iglesia.

Afirmando el principio de la primacía de la Ley al juzgar las causas matrimoniales, los tribunales eclesiásticos han de cumplir, desde su específica área, también un papel fundamental al servicio del matrimonio indisoluble y de la estabilidad familiar, protegidos directamente por el legislador canónico. El juez eclesiástico ha de saberse sometido a la ley y obrar en consecuencia. En su tarea se ha de hablar también de fidelidad, como obediencia a la Ley.

Permitaseme terminar —como se hizo en el comienzo— con unas palabras iluminadoras de S.S. Juan Pablo II: “La objetividad típica de la justicia y del proceso que en la “*quaestio facti*” se concreta en la adhesión a la *verdad*, en la “*quaestio iuris*” se traduce en la *fidelidad*; conceptos éstos que tienen gran afinidad entre sí, como es obvio. La fidelidad del juez a la ley debe lle-

varle a hacerse uno con ella, de tal modo que pueda decirse con razón lo que escribía M. T. Cicerón, es decir, que el juez es la *misma ley hablando*: "*magistratum legem esse loquentem*" (*De legibus*, L. 3, n. 1, 2; ed. de la Association G. Gudé, París 1959, pág. 82). Esta fidelidad será la que impulse al juez a adquirir el conjunto de cualidades que necesita para cumplir los otros deberes respecto de la ley: sabiduría para entenderla, ciencia para esclarecerla, celo para defenderla, prudencia para interpretarla en su espíritu más allá del "*nudus cortex verborum*", ponderación y equidad cristiana para aplicarla"⁴¹.

41. JUAN PABLO II, *Discurso al Tribunal de la Sacra Rota Romana*, 4-II-1980. La cita procede de la revista "Palabra", DP-32 (1980).